

Naciones Unidas
**ASAMBLEA
GENERAL**

NOVENO PERIODO DE SESIONES
Documentos Oficiales



SEXTA COMISION, 429a.

SESION

**Viernes 26 de noviembre de 1954,
a las 15.20 horas**

Nueva York

SUMARIO

Tema 50 del programa:	Página
Jurisdicción penal internacional: informe de la Comisión de Jurisdicción Penal Internacional (1953) (continuación)	161

Presidente: Sr. Francisco V. GARCIA AMADOR
(Cuba).

En ausencia del Presidente, el Sr. Sapozhnikov (República Socialista Soviética de Ucrania), Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

TEMA 50 DEL PROGRAMA

Jurisdicción penal internacional: informe de la Comisión de Jurisdicción Penal Internacional (1953) (A/2645, A/C.6/L.340) (continuación)

DEBATE GENERAL (conclusión)

1. El Sr. NANDI (Pakistán) recuerda que el nacimiento de una comunidad de naciones bajo la égida de la Carta de las Naciones Unidas ha puesto fin a una era de aislamiento de los Estados en la que naturalmente era desconocida la noción del delito de derecho internacional. Después de la primera fase de los tribunales *ad hoc* de Nuremberg y de Tokio, la Asamblea General consideró deseable la creación de una corte penal internacional, y con ese fin aprobó las resoluciones 489 (V) y 687 (VII). El informe de la Comisión encargada por la Asamblea de estudiar esta cuestión constituye un trabajo valioso y digno de elogio.

2. Antes de recomendar a la Asamblea que apruebe este informe y de que — como muchas delegaciones desean, entre otras la de Pakistán — haga de la jurisdicción penal internacional una realidad, habrá que examinar con el mayor cuidado diversas cuestiones:

1) ¿Tiene competencia la Asamblea General para crear una corte sin una previa enmienda de la Carta de las Naciones Unidas?

2) ¿Hay una mayoría importante de los Estados Miembros dispuesta a reconocer la competencia de esta corte?

3) ¿Cuáles serán la situación y el prestigio de la corte si ciertos grupos de Estados se niegan a reconocer su jurisdicción o si, habiéndosela atribuido, le retiran luego ese reconocimiento?

4) ¿No se arredrarán algunos Estados pequeños ante la carga financiera que les impondría la creación de la corte?

5) ¿No se verán otros Estados en la imposibilidad de apoyar el principio de la corte por temor de que se lesionen sus derechos de soberanía?

6) ¿No será ilógico crear una corte sin haber adoptado previamente el código que le servirá de guía y de instrumento de trabajo?

3. En vista de estas consideraciones, tan acertadamente expuestas por los representantes del Reino Unido y de Venezuela, la delegación de Pakistán votará a favor de un aplazamiento provisional del examen de la cuestión.

4. El Sr. BALICKI (Polonia) considera que la creación de una corte penal internacional, tal como la propone la Comisión de 1953, es contraria a los principios reconocidos del derecho internacional, lesiona la soberanía de los Estados y permite la ingerencia en sus asuntos internos. Además, la posibilidad de crear tribunales *ad hoc* hace innecesaria la existencia de una corte permanente.

5. Al examinar cuidadosamente el informe (A/2645), se advierte que muchas disposiciones, algunas de ellas muy importantes, fueron adoptadas por la Comisión de 1953 por una mayoría que en realidad no era tal, puesto que los votos en contra sumados a las abstenciones sobrepasaban el número de votos a favor. Una comparación del proyecto actual con el llamado de Ginebra (A/2136, anexo I) sólo demuestra una verdadera diferencia: el creciente escepticismo de los autores en cuanto al valor práctico de sus trabajos.

6. En realidad, estos trabajos adolecen de un vicio de origen, pues son contrarios a los principios del derecho internacional. Contra lo que algunos han sostenido, el proyecto de estatuto de la corte penal es contrario a los principios mismos de Nuremberg. Uno de los méritos principales del estatuto y de las sentencias del Tribunal de Nuremberg consiste en haber implantado el principio de la punibilidad de los delitos de guerra, a la vez que se respetaba la competencia soberana de los Estados con respecto a esos delitos y la territorialidad de la justicia. Por lo tanto, los adversarios de la corte penal internacional son los verdaderos defensores de los principios de Nuremberg. Tratar de imponer a los Estados la jurisdicción supranacional de una corte permanente es oponerse a lo previsto en los párrafos 1 y 7 del Artículo 2 de la Carta y obstruir el desarrollo del derecho internacional. No pudiendo sustraerse a esta contradicción, los partidarios de la corte proponen a los Estados que acepten un abandono parcial de sus derechos soberanos. El Sr. Balicki estima que es preferible renunciar a la creación de la corte.

7. El representante de Polonia desea destacar que su delegación no se opone en modo alguno al principio de la creación de tribunales *ad hoc* en casos concretos. Su oposición está dirigida contra el carácter permanente que quiere darse a la corte y contra la lesión que ello entraña para un derecho esencial de los Estados.

8. El representante del Reino Unido reconoció (426a. sesión) que los Estados pueden reprimir los delitos de

guerra. Lo mismo puede decirse de los delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, como lo demuestra la legislación de Polonia.

9. Para terminar, el Sr. Balicki declara que conviene abandonar todo intento de crear una corte penal internacional.

10. Se reserva el derecho de precisar más adelante la actitud de la delegación de Polonia con respecto al proyecto de resolución de Venezuela (A/C.6/L.340).

11. El Sr. MENDEZ (Filipinas) recuerda que su país estuvo representado en la Comisión de 1953 y quiere rendir homenaje a la precisión y claridad con que el relator de esa Comisión ha dado cuenta de las ideas expresadas y de las sugerencias formuladas en la misma por el representante de Filipinas.

12. Después de haber decidido aplazar por dos años la cuestión de la definición de la agresión y la del proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, es lógico decidir también que se aplase la cuestión que ahora se examina, tanto más cuanto que la situación internacional, aunque ha mejorado algo, todavía no permite esperar que se reúna la vasta mayoría que, llegado el momento, deberá aprobar la creación de una corte penal internacional.

13. Por lo tanto, la delegación de Filipinas votará a favor del proyecto de resolución de Venezuela.

14. El Sr. HAMILTON (Australia) manifiesta que si bien la creación de una corte penal internacional representa un ideal noble al cual no cabe oponerse en principio, la Comisión no debe perder de vista la realidad y considerar si existen ya las condiciones necesarias para la creación de una corte. El apoyo general de la comunidad internacional organizada es esencial para la institución de esa corte, así como la existencia de un derecho internacional que la corte pueda aplicar. En el momento actual no existen esas condiciones, pero es posible que la situación mejore con el tiempo.

15. Por esta razón, la delegación de Australia votará a favor de que se aplase esta cuestión.

16. El Sr. AKANT (Turquía) hace notar que la Comisión de 1953, cuyos esfuerzos son dignos de encomio, no ha podido resolver el problema fundamental de la oportunidad misma de la creación de una corte penal internacional y que no ha querido dar a sus proposiciones ningún carácter definitivo.

17. Suponiendo que se cree una corte, ¿qué derecho aplicará? Se ha podido decir que, al juzgar y condenar, los tribunales de Nuremberg y de Tokio aplicaron el derecho. Pero se trataba en ese caso de tribunales especiales. Se plantean otras cuestiones: ¿A quién podría considerarse como delincuente? ¿Cuál sería la competencia de la corte?

18. Si bien los fallos de Nuremberg y de Tokio constituyen un progreso en el campo de la jurisdicción penal internacional, no existe en este momento ninguna formulación de sus principios. Conviene empezar creando los elementos que le serán indispensables a la corte. Habiéndose aplazado el examen de los dos temas anteriores del programa de la Comisión, hay que aplazar también el estudio de la creación de la corte y aprobar, con este fin, el proyecto de resolución presentado por Venezuela.

19. El Sr. PECHOTA (Checoslovaquia) recuerda los argumentos expuestos por su delegación en el sép-

timo período de sesiones de la Asamblea General al oponerse a un proyecto inaceptable que la Comisión de 1953 se esfuerza por resucitar en su informe.

20. Los representantes de la RSS de Ucrania y de Polonia han puesto de relieve el carácter inaceptable de este proyecto que atentaría contra el principio de la soberanía de los Estados y de no intervención en el dominio reservado de éstos. La creación del organismo permanente superestatal que se prevé se opondría abiertamente al principio de la competencia exclusiva de los Estados en materia penal.

21. En el párrafo 17 de su informe, la Comisión de 1953 ha reconocido que no se puede crear la corte si los Estados no renuncian a una parte de su soberanía actual. Los Estados no pueden aceptar ninguna renuncia de este tipo.

22. También conviene destacar que la Comisión de 1953 ha llevado a cabo sus trabajos sin preocuparse de averiguar si los Estados desean que se cree una corte y si estarían dispuestos a prestarle su concurso. La Comisión lo reconoce (A/2645, párr. 155) y esta confesión basta para demostrar que ha desatendido la realidad.

23. En opinión del Sr. Pechota, varias disposiciones del proyecto de estatuto autorizarían intervenciones graves en los asuntos internos de los Estados. Esta idea es contraria al espíritu y a la letra de la Carta, y a los principios fundamentales del derecho internacional, en especial a las normas jurídicas de Nuremberg y de Tokio.

24. Tanto la Declaración de Moscú de 1943 como el Acuerdo de Londres de 1945 consagraron el principio de la territorialidad de la justicia penal, en virtud del cual los delincuentes deben ser extraditados a los países donde han cometido los delitos para ser enjuiciados allí. En ciertos casos especiales, cuando es imposible circunscribir geográficamente los delitos, los Estados pueden concertar acuerdos que tengan por objeto organizar una jurisdicción penal internacional de carácter temporal.

25. El proyecto de estatuto para una corte penal internacional no respeta estas normas y, por lo tanto, es inaceptable.

26. El Sr. GARCIA OLANO (Argentina) señala que la posición del Gobierno argentino frente al problema de la creación de la corte fué expuesto claramente durante el séptimo período de sesiones de la Asamblea General y sus puntos de vista mantienen plena actualidad, pudiendo ser resumidos así: desde un punto de vista teórico, la institución de la jurisdicción penal internacional resulta deseable mientras no traiga aparejada la aceptación del carácter obligatorio de esa jurisdicción o de la ejecución compulsiva de sus decisiones; desde un punto de vista práctico considera que el estado actual de la comunidad internacional no permitiría la actuación eficaz de ese sistema judicial.

27. La Argentina participó en los trabajos de la Comisión de 1953 propiciando el carácter no obligatorio de la jurisdicción y la no ejecución compulsiva de sus decisiones.

28. Sin detenerse a hacer un detallado examen del proyecto de estatuto, el Sr. García Olano destaca que las enmiendas incorporadas al proyecto de estatuto elaborado por la Comisión de Ginebra son acertadas en el plano técnico-jurídico. Como el problema se plantea actualmente en el plano político y no en el técnico-

jurídico, el orador opina que a la Asamblea General corresponderá pronunciarse sobre la oportunidad y conveniencia del establecimiento de la jurisdicción penal internacional, y todo examen del método a seguir para la eventual creación de esa jurisdicción debe ser aplazado hasta que la Asamblea se expida sobre la creación. Por último, esta cuestión está ligada con el problema del proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad y como el estudio de éste ha sido aplazado, conviene igualmente aplazar la consideración de la creación de una jurisdicción penal internacional.

El Sr. García Amador (Cuba) ocupa la Presidencia.

29. El Sr. P. D. MOROZOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera que el representante de los Países Bajos planteó mal el problema al decir, al comienzo del debate, que el problema fundamental que hay que resolver consiste en saber si conviene establecer desde ahora una corte penal internacional, o si es preferible esperar hasta un momento más oportuno. En cierta medida, esta afirmación ha dado una falsa orientación al debate, pues se basa en el falso supuesto de que el texto revisado del proyecto de estatuto no suscita objeciones de principio y que se trata sencillamente de fijar la fecha en que entrará en vigor. Pero en realidad lo que interesa ante todo es saber si la creación de una corte penal internacional, fundada en el proyecto de estatuto presentado por la Comisión de 1953, se ajusta o no a las normas admitidas de derecho internacional y a los principios de la Carta. En opinión del Sr. Morozov, la respuesta a esta pregunta debe ser negativa.

30. La delegación de la URSS considera que la creación de una corte sobre la base del proyecto de estatuto sería incompatible con los principios, enunciados en la Carta, de la soberanía de los Estados y de la no intervención en sus asuntos internos. Hasta ahora estos principios han regido la cooperación internacional en el dominio de la represión de los delitos contra la paz y la seguridad, y se aplicaron especialmente con motivo de la creación de los tribunales de Nuremberg y de Tokio. El Sr. Morozov apoya a este respecto los puntos de vista expuestos en las intervenciones de los representantes de la RSS de Ucrania, de Polonia y de Checoslovaquia.

31. La Comisión indica en su informe (A/2645), que no se ha resuelto ninguna cuestión de importancia relacionada con la jurisdicción y la organización de la corte. En otras palabras, esta Comisión, formada por juristas eminentes, no ha podido cumplir de manera satisfactoria la tarea que se le había confiado porque resultaba imposible de cumplir sobre las bases propuestas en el proyecto de estatuto.

32. El Sr. Morozov no se propone remediar los defectos que ha señalado; en realidad son irremediables y muestran sencillamente que, no por accidente, hasta los esfuerzos de los juristas más competentes son estériles. Siempre sucede así cuando las bases de cualquier documento contravienen los principios aceptados del derecho internacional.

33. El Sr. Morozov considera que el proyecto de estatuto para una corte penal internacional es incompatible con los estatutos de los tribunales de Nuremberg y de Tokio. En efecto, exige que los Estados renuncien a su derecho soberano de administrar la justicia penal. Ahora bien, los tribunales de Nuremberg y de Tokio

fueron creados conjuntamente por varios Estados que habían decidido ejercer en común sus competencias nacionales en materia criminal en ciertos casos de delitos que no están relacionados en lugares geográficos determinados. Esa es la interpretación que procede dar a la Declaración de Moscú y al Acuerdo de Londres. Esos tribunales se crearon sobre la base de un acuerdo entre Estados soberanos para juzgar casos concretos.

34. Es posible y conveniente crear tribunales internacionales para juzgar los delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, así como los crímenes de guerra, que conocerían de los casos concretos en virtud de un convenio concluido sobre un pie de igualdad entre los Estados que formasen parte del tribunal y lo organizaran en cada caso particular.

35. El Sr. Morozov señala que algunos representantes, si bien se oponen a la creación de una corte penal internacional, están dispuestos a aceptar el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución (A/C.6/L.340) en el que se agradece a la Comisión de 1953 los esfuerzos que ha realizado. La Sexta Comisión debe tomar nota de que los trabajos de la Comisión de 1953 adolecen de graves defectos. La delegación de la URSS no podrá votar a favor de dicho párrafo.

36. El PRESIDENTE declara cerrado el debate general e invita a los miembros de la Comisión a formular observaciones sobre el proyecto de resolución de Venezuela (A/C.6/L.340).

EXAMEN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN PRESENTADO POR VENEZUELA (A/C.6/L.340) Y DE LAS ENMIENDAS RESPECTIVAS

37. El Sr. SECADES (Cuba) explica la actitud de su delegación acerca del proyecto de resolución. La delegación de Cuba siempre ha declarado su vivo interés por el desarrollo progresivo del derecho penal internacional. Esta actitud se funda en razones de orden jurídico y político. El Sr. Secades lamenta que la Comisión haya decidido posponer el estudio de la definición de la agresión. La delegación de Cuba se abstuvo de votar cuando se tomó una decisión respecto al proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad. En opinión del Sr. Secades, el vínculo que une a esas dos cuestiones es más aparente que real. Es necesario establecer una distinción entre el aspecto político del problema y su aspecto fundamental, que es esencialmente jurídico. Habría sido preferible, para justificar el aplazamiento del estudio del proyecto de código, alegar que la Comisión no dispuso del tiempo necesario para hacerle objeto de un examen detenido. De este modo, la Comisión no habría comprometido para más adelante su posición sobre este asunto.

38. De igual modo, la Comisión debería considerar la cuestión de una corte penal internacional como una cuestión separada. El Sr. Secades recuerda que su delegación es partidaria del desarrollo de este aspecto del derecho internacional, y que fué coautora de la resolución en cuya virtud se creó la Comisión de Jurisdicción Penal Internacional de 1951 (A/C.6/L.151/Rev.1).

39. En consecuencia, la delegación de Cuba habría preferido que se continuara el examen de la cuestión. Sin embargo, no sería lógico ni posible, desde el punto de vista jurídico, estudiar la organización y el proce-

dimiento de una corte penal sin haber previamente definido los delitos que sería competente para juzgar, y sin haber establecido las responsabilidades y las penas correspondientes. Por este motivo, y dado que la Comisión ha decidido diferir el examen del proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, se hace ahora necesario diferir también el examen de la cuestión que se está discutiendo. En consecuencia, la delegación de Cuba votará en favor del proyecto de resolución de Venezuela.

40. No obstante, el Sr. Secades señala que se abstendrá de votar sobre los párrafos segundo y tercero del preámbulo, que subrayan el nexo que existe entre la definición de la agresión, el proyecto de código y la jurisdicción penal internacional. El Sr. Secades pide que esos dos párrafos se sometan a votación por separado.

41. Pregunta al representante de Venezuela si consentiría en suprimir, en el preámbulo del proyecto de resolución, la mención de la nueva Comisión Especial para la cuestión de la definición de la agresión, teniendo en cuenta que el representante de Grecia ha propuesto esta supresión en lo que se refiere al párrafo 2 de la parte dispositiva (428a. sesión).

42. El Sr. PEREZ PEROZO (Venezuela) considera que, en efecto, sería lógico suprimir dicha mención en el preámbulo, si se decide que no figure en la parte dispositiva. Pero al proceder de este modo se destruiría la actual armonía del proyecto, que se funda en la relación que existe entre las tres cuestiones estudiadas por la Sexta Comisión. Por este motivo, el Sr. Pérez Perozo solicita del representante de Grecia que tenga a bien considerar la posibilidad de retirar su propuesta. Conviene proceder con prudencia y parecería preferible conservar el texto primitivo.

43. El Sr. Pérez Perozo señala, respecto del texto inglés del párrafo 1 de la parte dispositiva, que su objeto es agradecer a la Comisión de 1953 sus esfuerzos, más bien que la tarea realizada.

44. Sir Gerald FITZMAURICE (Reino Unido) propone que se modifique la frase de que se trata para que diga así: *for its efforts in fulfilling the task entrusted to it*.

45. El Sr. P. D. MOROZOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expone que la modificación propuesta por el representante del Reino Unido en nada modifica el sentido del párrafo, y que sería preferible suprimirlo pura y simplemente para que desaparezca toda ambigüedad.

46. El Sr. STEIN (Canadá) sugiere que se mantenga, en el párrafo 2 de la parte dispositiva, la mención del informe de la nueva Comisión Especial y propone para dicho párrafo, la siguiente redacción:

"Decide aplazar el examen de la cuestión de la jurisdicción penal internacional hasta que la Asamblea General haya considerado el informe de dicha Comisión Especial para la cuestión de la definición de la agresión y haya considerado nuevamente el proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad".

Es muy poco probable, en su opinión, que la Asamblea examine en el mismo período de sesiones el informe de la Comisión Especial y el proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad.

47. El Sr. Stein no se opone a la supresión del párrafo 1 de la parte dispositiva. Señala al representante de la Unión Soviética que el párrafo 2 de la parte dispositiva no se refiere al texto revisado del proyecto de estatuto, sino simplemente a la cuestión general de la jurisdicción penal internacional.

48. El Sr. COLLIARD (Francia) apoya la proposición del representante del Canadá por las razones que han fundado su actitud respecto de la enmienda propuesta por Grecia. También el Sr. Colliard considera que es muy poco probable que la Asamblea estudie, en el curso del mismo período de sesiones, el informe de la Comisión Especial y el proyecto de código.

49. El Sr. FAHMY (Egipto) recuerda, a fin de explicar la actitud de su delegación respecto del proyecto de resolución de que se está ocupando la Comisión, una declaración que hizo su delegación en la 326a. sesión de la Comisión, durante el séptimo período de sesiones. La delegación de Egipto dijo entonces que la creación de una jurisdicción penal internacional debería ir precedida de la codificación completa del derecho que correspondería aplicar a esta corte, y de una definición del régimen de las penas.

50. Después de los debates sobre la cuestión que se discute, y sobre las dos anteriores, la delegación de Egipto está más convencida que nunca de que es necesario posponer el examen de la cuestión de una jurisdicción penal internacional. Por tanto, votará a favor del proyecto de resolución de Venezuela, teniendo en cuenta las modificaciones que sean necesarias.

51. El Sr. Fahmy no se opondrá a la enmienda propuesta por el Canadá si resulta aceptable para el representante de Venezuela.

52. El Sr. GALLEGOS (Ecuador) considera que, para no incurrir en injusticia ni arbitrariedad, el derecho internacional debe fundarse en el prudente análisis de las realidades. Por eso le ha complacido ver que en el proyecto de resolución de Venezuela se atiende a lo que es posible. Este texto le parece satisfactorio, tanto en el fondo como en la forma. Tiene, sobre todo, la ventaja de proporcionar a los gobiernos tiempo bastante para que consideren el problema de la jurisdicción penal internacional una vez que la Asamblea haya estudiado los otros dos temas.

53. El representante del Ecuador desea que se conserve el párrafo 1 de la parte dispositiva, que no es una aprobación de la labor efectuada por la Comisión de 1953, pero sí una expresión del natural agradecimiento.

54. El Sr. Gallegos se pronuncia en favor del proyecto de resolución, con la reserva de las mejoras que puedan introducirse en el curso del debate.

55. El Sr. SPIROPOULOS (Grecia) estima que la Asamblea General tardará bastante tiempo en ocuparse de nuevo del tema de la jurisdicción penal internacional. Siendo difícil calcular el período que habrá de transcurrir, más vale que el proyecto de resolución no contenga instrucciones precisas que pudieran resultar inútiles.

56. Por eso le parece bien el texto del proyecto de resolución tal como queda reformado con la enmienda del representante del Canadá, y el Sr. Spiropoulos se muestra favorable a su aprobación.

57. La Srta. SOUTER (Nueva Zelanda), aunque aprueba el principio de una jurisdicción penal internacional, no considera deseable ni oportuna en el momento actual la creación de una corte. En tal virtud, dará su apoyo al proyecto de resolución modificado por Canadá, que le parece perfectamente razonable.

58. El Sr. MAURTUA (Perú) teme que, si se vinculan, como en el texto propuesto por Venezuela, la definición de la agresión y el código de delitos con el problema de la jurisdicción penal internacional, se aplase en realidad *sine die* el examen del proyecto de estatuto de una corte penal.

59. El Sr. ROBINSON (Israel) comparte la opinión del representante del Perú. En efecto, si bien es fácil cumplir la condición previa del examen del proyecto de código, no ocurre lo mismo con la otra condición previa, o sea la de que se apruebe una definición de la agresión. Es peligroso ligar de esta suerte el tema que está tratando la Comisión con un asunto cuya solución parece incierta.

60. Sugiere, por lo tanto, el Sr. Robinson que se modifique la enmienda del Canadá suprimiendo la referencia al informe de la nueva Comisión Especial para la cuestión de la definición de la agresión. El texto sería entonces el siguiente:

“Decide aplazar el examen de la cuestión de la jurisdicción penal internacional hasta que la Asamblea General haya considerado el proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad”.

61. Como consecuencia de esta modificación, y a fin de asegurar la congruencia lógica del preámbulo con el nuevo párrafo 2 de la parte dispositiva, habría que hacer leves cambios a la redacción de los diversos considerandos.

62. De aprobarse este texto, la Comisión aplazaría temporalmente y no *sine die*, el estudio del tema del programa que en la actualidad está tratando.

63. El Sr. ANAYA (Colombia) estima que, del texto primitivamente propuesto por Venezuela, al igual que de la enmienda del Canadá, resulta que la Asamblea General tendrá que considerar con cierto automatismo la cuestión de la jurisdicción penal internacional, tan pronto como se haya ocupado de la definición de la agresión y del código de delitos. Ahora bien, es posible que la Asamblea General, después de tratar estos dos últimos temas, juzgue inoportuno, dadas las circunstancias, discutir el problema de una jurisdicción penal internacional. La Asamblea debe quedar en libertad de decidir si ha de proceder o no a examinar esta cuestión.

64. Esto es lo que mueve al representante de Colombia a proponer la modificación del párrafo 2 de la parte dispositiva para que en él se diga que el examen de la cuestión se aplazará hasta el momento en que la Asamblea juzgue oportuno reanudarlo.

65. El Sr. PRATT DE MARIA (Uruguay), por estimar indispensable que no se pongan trabas a la libertad de acción de la Asamblea General, se suma a la propuesta de Colombia.

66. El Sr. PEREZ PEROZO (Venezuela), en respuesta al representante del Canadá, declara que debe transcurrir cierto tiempo entre el estudio de la definición de la agresión y del proyecto de código y el

examen de la cuestión de la jurisdicción penal internacional.

67. Acepta la enmienda del Canadá al párrafo 2 de la parte dispositiva, pese a que es menos precisa que el texto inicial.

68. Reconoce el Sr. Pérez Perozo que si el estudio de la cuestión de la jurisdicción penal internacional se subordina a la solución de las dos cuestiones ya aplazadas — como parecen creerlo los representantes del Perú y de Israel — se correría el riesgo de un aplazamiento *sine die*. Pero no ocurre así, ya que lo que se dice en el párrafo 2 de la parte dispositiva es que el examen de la cuestión de la jurisdicción penal internacional se efectuará cuando la Asamblea General haya considerado el informe de la nueva Comisión Especial y el proyecto de código. El texto dice “considerado” y no “aprobado”.

69. Si figurase el término “aprobado” en el párrafo 2, la Comisión prejuzgaría la actitud de la Asamblea General; mas no ha sido ésa la intención del autor del proyecto, contrariamente a lo que parecen temer los representantes de Colombia y Uruguay. En la práctica, el párrafo 2 de la parte dispositiva modificado por el Canadá, y el texto propuesto por Colombia conducen al mismo resultado: cuando la Asamblea General haya considerado la cuestión de la definición de la agresión y el proyecto de código, el Secretario General incluirá en el programa provisional del siguiente período de sesiones el tema de la jurisdicción penal internacional. Corresponderá entonces a la Mesa de la Asamblea determinar si dicho tema ha de figurar en el programa definitivo. De este modo, la Asamblea General sigue siendo dueña de sus decisiones.

70. El Sr. ROLLING (Países Bajos) coincide con el representante de Israel en que es normal vincular el estudio de la cuestión de la jurisdicción penal internacional con el examen del código de delitos, pero que no sería prudente subordinarlo a la elaboración de una definición de la agresión, elaboración que juzga muy problemática. Por eso, quisiera saber si el proyecto de resolución hace depender el nuevo examen del hecho de que la Asamblea General apruebe una definición de la agresión, o simplemente del hecho de que examine tal definición.

71. El Sr. PEREZ PEROZO (Venezuela) precisa que en el párrafo 2 de la parte dispositiva no se señalen más que dos condiciones: por una parte, la consideración del informe de la Comisión Especial, y por la otra, el examen del proyecto de código de delitos. No se estipula en el texto como condición previa que la Asamblea General apruebe una definición de la agresión.

72. El Sr. ROBINSON (Israel) pide que la Comisión vote sobre la parte dispositiva del proyecto de resolución antes de hacerlo sobre el preámbulo.

73. El PRESIDENTE somete a votación la enmienda formulada verbalmente por el representante de Israel, con objeto de que en el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución de Venezuela, y, consiguientemente, en el preámbulo, deje de mencionarse la cuestión de la definición de la agresión.

Por 22 votos contra 3, y 22 abstenciones, queda desechada la enmienda.

74. El Sr. ANAYA (Colombia) retira su proyecto de enmienda, por haberle dado el representante de Vene-

zuela las seguridades de que el texto de su proyecto de resolución modificado por la enmienda del Canadá llevará al mismo resultado.

75. El PRESIDENTE somete a votación párrafo por párrafo, el proyecto de resolución de Venezuela (A/C.6/L.340) con la enmienda propuesta por el Canadá y aceptada por el autor de aquél.

Por 37 votos contra ninguno y 7 abstenciones, queda aprobado el párrafo 2 de la parte dispositiva, en su forma enmendada.

Por 36 votos contra 5, y 4 abstenciones, queda aprobado el párrafo 1 de la parte dispositiva.

Por 36 votos contra ninguno y 5 abstenciones, queda aprobado el primer párrafo del preámbulo.

Por 35 votos contra ninguno y 5 abstenciones, queda aprobado el segundo párrafo del preámbulo.

Por 35 votos contra ninguno y 10 abstenciones, queda aprobado el tercer párrafo del preámbulo.

Por 35 votos contra ninguno y 7 abstenciones, queda aprobado el cuarto párrafo del preámbulo.

76. El Sr. RÖLING (Países Bajos) plantea una cuestión de orden y pregunta lo que significa la palabra "lapso" que figura en el texto que acaba de ser aprobado, teniendo en cuenta el texto del párrafo 2 de la parte dispositiva modificado por la enmienda.

77. El Sr. PEREZ PEROZO (Venezuela) responde que la cuestión de la jurisdicción penal internacional se examinará después de haberse considerado las cuestiones conexas, lo que supone que, necesariamente, transcurrirá cierto lapso.

78. El PRESIDENTE somete a votación, en su totalidad, el proyecto de resolución presentado por Venezuela (A/C.6/L.340), tal como ha sido modificado por las enmiendas.

Por 37 votos contra ninguno y 7 abstenciones, queda aprobado el proyecto de resolución en su totalidad.

79. El Sr. TARAZI (Siria), ha dado su voto al proyecto de resolución porque estima que debe aplazarse el examen de la cuestión, pero se ha abstenido de votar los considerandos, ya que, a su juicio, no existe vinculación alguna entre la definición de la agresión que es un problema político, y la jurisdicción penal internacional, que debe ser asunto exclusivamente jurídico.

80. El PRESIDENTE anuncia que la Mesa de la Asamblea ha decidido mantener la fecha del 10 de diciembre para la clausura del período de sesiones. Pide a las delegaciones que procuren utilizar plenamente el tiempo dedicado a cada sesión, a fin de que la Sexta Comisión termine cuanto antes sus trabajos, facilitando de ese modo la labor de otras Comisiones, que han adelantado menos en los suyos.

Se levanta la sesión a las 18.50 horas.